

SEPTIEMBRE 24 DE 1919

42.<sup>a</sup> REUNIÓN --- 25.<sup>a</sup> SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL Dr. D. BENITO VILLANUEVA

Senadores presentes: Albarracín, Caballero, Castañeda Vega, Del Valle Iberlucea, Esteves, Gallo, García González, Iturbe, Larlús, Linares, Llanos, Melo, Patrón Costas, Roca, Saguier, Soto, Torino, Vidal, Villanueva, Zabala.

Senadores ausentes, con aviso: Garro, Iturraspe.

SUMARIO

- 1.—La cámara de diputados remite la nómina de las pensiones desechadas.
- 2.—Despachos de las comisiones.
- 3.—Proyecto de ley de los señores senadores Robustiano Patrón Costas y Luis Linares, concediendo pensión a la señorita María Romero.
- 4.—Incidencia sobre el despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley del señor senador Zabala, derogando el artículo 7.º de la ley 10.394, sobre impuesto a la exportación. Se resuelve considerar ese despacho como primer asunto en la sesión siguiente.
- 5.—Se resuelve considerar el proyecto de ley en segunda revisión, sobre censo y representación parlamentaria y obras de fomento en las provincias del norte y del oeste, en la sesión del jueves 25 del corriente.
- 6.—A indicación del señor senador Joaquín V. González, se resuelve considerar sobre tablas el despacho de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de ley del señor senador Octavio Iturbe, reintegrado en sus derechos políticos a los ciudadanos argentinos que prestaron servicios en los ejércitos beligerantes de la guerra europea. Se aprueba.

- 7.—A indicación del señor senador Fernando Saguier se resuelve considerar sobre tablas el despacho de la comisión de obras públicas sobre ejecución de obras de sancamiento, cloacas y drenaje en la ciudad de Bahía Blanca.
- 8.—Se aprueba en general y particular el despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley venido en revisión, reglamentando el ejercicio de la procuración.

—En Buenos Aires, a las 4 y 5 p. m. de 1919, dice el

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Queda abierta la sesión con 21 señores senadores presentes.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

1

PENSIONES DESECHADAS

**Sr. Secretario Ocampo.** — La cámara de diputados comunica no haber prestado su sanción a diversas pensiones civiles y militares.



obras se hará en las mismas condiciones que las que establece la ley general.

**Sr. Saguier.** — Exactamente.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar la moción del señor senador por Buenos Aires.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Zabala.** — Pido la palabra; para informar en nombre de la comisión de obras públicas, el proyecto en revisión, de que acaba de darse cuenta.

Es verdaderamente asombroso que la ciudad de Bahía Blanca, dada la importancia y la población que tiene, que pasa de 60.000 habitantes y la riqueza de su vecindario, no tenga ya realizadas y completas sus obras sanitarias. Las obras a realizarse, están presupuestadas en la suma de pesos 2.571.528, pero tal vez con el aumento de algunos renglones, se puede, desde ya calcular que llegarán a 3.600.000 pesos. El servicio de los bonos que se emitirán sería de 216.000 pesos, que se cubrirían fácilmente, con el impuesto correspondiente por el servicio de estas obras.

Una vez efectuados estos trabajos en Bahía Blanca, prestarán servicios a más de 4.000 casas, y basta ese solo dato para que el honorable senado se dé cuenta de la facilidad con que se han de cubrir los gastos que ocasione la ejecución de estas obras, que han sido ya informadas favorablemente por la dirección de obras de salubridad de la nación, aconsejando su ejecución, y ellas se harían de acuerdo con el proyecto aprobado por el directorio de esta oficina técnica.

El artículo 1.º establece que las obras se harán una vez que la provincia de Buenos Aires llene las condiciones del artículo 8.º de la ley 4118 y de acuerdo con el proyecto aprobado por las obras de salubridad de la nación. Se autoriza por el proyecto la emisión de bonos de las leyes 4158 y 4973 hasta la suma de 3.600.000 \$ y la expropiación de la empresa de aguas corrientes de esa ciudad cuando el poder ejecutivo lo juzgue conveniente.

El artículo 5.º garante el pago de

los intereses de la emisión con el producto de la explotación y los recursos de la ley 3961. Y por último, se establece que el cobro de los servicios de las obras lo hará el gobierno hasta tanto se haya cubierto el costo de las mismas. Por estas referencias, se ve que son perfectamente factibles las obras y la conveniencia de su realización.

Creo, pues, que bastan estas breves consideraciones para fundar el proyecto y para que el honorable senado le preste su aprobación.

Nada más.

—Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular el proyecto.

8

#### EJERCICIO DE LA PROCURACION

*Honorable senado:*

La comisión de legislación ha estudiado el proyecto de ley venido en revisión, por el que se reglamenta el ejercicio de la procuración; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le preséts vuestra aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 2.º — Substituir en el párrafo primero las palabras "La secretaría de la suprema corte de justicia", por las siguientes: "La secretaría de la cámara federal de apelaciones de la capital".

En el tercer párrafo del mismo artículo substituir "Suprema corte nacional" por "Cámara federal de apelaciones de la capital".

Art. 3.º — Inciso 4.º. Se substituye por el siguiente: Constituir a la orden del presidente de la cámara federal de apelaciones de la capital, un depósito de cinco mil pesos moneda nacional en efectivo, o su equivalente en títulos de crédito público nacional o en cédulas hipotecarias argentinas o una primera hipoteca o una fianza personal, solidaria, a satisfacción del mismo funcionario, otorgada por dos letrados de la matrícula, por igual suma.

En la justicia federal de las provincias y territorios nacionales, este depósito, hipoteca o garantía, será por valor de pesos dos mil moneda nacional, a la orden de los respectivos presidentes de las cámaras de apelaciones o jueces de sección o letrados, en su caso.



Art. 4.º — Substituir “diez años” por “cinco años”.

Art. 5.º — Inciso 2.º. Suprimir la palabra “no”.

Art. 5.º — Inciso 3.º. Agregar lo siguiente: “que hagan parte del personal administrativo de organización jerárquica y retribuido”.

Art. 6.º — Substituir el párrafo último por el siguiente: “El auto que decreta la eliminación será apelable en relación, para ante el tribunal superior correspondiente. Si fuere dictado por la suprema corte, o cualquiera de las cámaras de apelación, procederá el recurso de revocatoria”.

Art. 7.º — Al comienzo del primer párrafo agregar después de la palabra “depósito” “o garantía”; y substituir a continuación la palabra “garantiza” por “aseguran”.

Substituir el párrafo segundo por el siguiente: “Este depósito o garantía no será embargable por otras causas u obligaciones que las determinadas a su destino, y si por tales motivos disminuyeran o desaparecieran, deberán integrarse dentro de los treinta días subsiguientes, bajo pena de suspensión del procurador, la que será pronunciada de oficio”.

Agregar a continuación del último párrafo lo siguiente: “Igual disposición rige en caso de hipoteca o fianza personal. Esta última deberá renovarse o modificarse como la hipoteca en su caso, toda vez que el tribunal respectivo lo disponga”.

Art. 8.º — Agregar como inciso 5.º, el siguiente: “Por pérdida de los derechos civiles posterior a la inscripción”.

Art. 9.º — Suprimir “por resolución, etcétera, hasta el fin del párrafo.

Inciso 2.º — Se substituye por el siguiente: “Por falta de integración del depósito, modificación de la fianza o renovación o ampliación de la hipoteca a que se refiere el inciso 4.º del artículo 3.º. Si en cualquiera de estos casos no se cumpliera la orden del tribunal dentro del plazo de seis meses, el procurador será eliminado del registro.

En los casos de suspensión o eliminación, como sanción disciplinaria, el procurador tendrá recurso de apelación para ante el tribunal superior inmediato, y el de revocatoria, si se tratara de resoluciones tomadas por la suprema corte o las cámaras. La eliminación por reiteradas correcciones disciplinarias sólo puede ser decretada por la autoridad judicial que tiene a su cargo el registro”.

Art. 11. — Inciso 3.º. Agregar a continuación del segundo párrafo lo siguiente: “Esta disposición no regirá en los tribunales en que el número de letrados matriculados y en ejercicio no exceda de cinco”.

Se suprimen los incisos 5.º, 6.º, 7.º y 8.º.

Art. 12. — Después de la palabra “títu-

lo”, y en reemplazo de las actuales, lo siguiente: “y llenar los demás requisitos establecidos en el artículo 3.º”.

Art. 13. — Después de las palabras “provincias o territorios nacionales”, y en reemplazo de las actuales, lo siguiente: “y llenar la exigencia del depósito, hipoteca o fianza prescripta por el artículo 3.º, inciso 4.º”.

Art. 18. — Se substituye por el siguiente: “La cámara federal de apelaciones de la capital reglamentará la forma en que ha de llevarse el registro de procuradores, y lo comunicará, con las modificaciones que sufra, a la suprema corte de justicia nacional, cámaras de apelaciones de la capital y demás cámaras federales de apelación a efectos de que, a su turno, las transmitan a los jueces de su respectiva jurisdicción”.

Sala de la comisión, septiembre de 1919.

Vicente C. Gallo. — Julio A. Roca.

— Octavio Iturbe.

#### PROYECTO DE LEY

*El senado y cámara de diputados, etcétera.*

Artículo 1.º — La representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la capital de la república y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias, sólo podrá ser ejercitada:

- 1.º Por los abogados con título expedido por la universidad nacional.
- 2.º Por los procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente.
- 3.º Por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales.
- 4.º Por los que ejerzan una representación legal.

Art. 2.º — La secretaría de la suprema corte de justicia o el funcionario de su dependencia que designe este tribunal, llevará un registro de matrícula de procuradores, en el cual serán inscriptos, á solicitud de parte interesada, los que reúnan las condiciones establecidas en la presente ley.

Este registro estará a cargo de las cámaras federales de apelación en las capitales o provincias que las tuvieren y de los jueces de sección o letrados en las provincias y en los territorios nacionales, respectivamente.

Unos y otros funcionarios comunicarán oportunamente a la suprema corte nacional la nómina de los inscriptos a los efectos de su anotación en el registro de esta última.

Art. 3.º — Para ser inscripto en la matrícula de procuradores, se requieren las siguientes condiciones:

- 1.º Mayoría de edad.
- 2.º Juramento de estar en el pleno goce de sus derechos civiles y de no



estar afectado de ninguna de las inhabilidades establecidas en la presente ley.

3.º Título acordado por universidad nacional; y a falta de éste, serán títulos de suficiencia.

a) El título de doctor en jurisprudencia, emanado de universidades oficiales de las provincias.

b) Los certificados expedidos en forma por las facultades universitarias de la nación que acrediten haber sido aprobado el postulante en todas las materias codificadas.

4.º Constituir a la orden del presidente de la suprema corte, en la capital federal un depósito de cinco mil pesos moneda nacional en efectivo, o su equivalente en títulos de crédito público nacional o en cédulas hipotecarias argentinas o una primera hipoteca por la misma suma.

En la justicia federal de las provincias y territorios nacionales este depósito será de dos mil pesos moneda nacional o su equivalente en títulos nacionales o una primera hipoteca por la misma suma, constituido a la orden de los respectivos presidentes de las cámaras de apelaciones o jueces de sección o letrados, en su caso.

Art. 4.º — Podrán ser inscriptos en la matrícula de procuradores los que a la promulgación de la presente ley hubieren desempeñado por más de diez años empleos judiciales de actuación en los tribunales de la capital, los que deberán solicitar su inscripción dentro de los seis meses, comprobando el buen desempeño de sus funciones con el justificativo legal del hecho enunciado y el certificado del depósito requerido por el artículo anterior.

Art. 5.º — No podrán inscribirse en el registro de procuradores:

1.º Los que hubiesen sido condenados a penitenciaría o presidio o a cualquier pena por delitos contra la propiedad o contra la administración o la fe pública, lo mismo que en las falsedades y falsificaciones.

2.º Los escribanos con registro, titulares o adscriptos que no ejerzan la profesión de tales.

3.º Los funcionarios o empleados públicos nacionales, provinciales o municipales.

Art. 6.º — Cualquier juez o tribunal ante el cual se probara que un procurador en ejercicio se encontrara comprendido en algunos de los casos de inhabilidad de la presente ley, decretará su eliminación de la matrícula, poniendo el hecho en conocimiento del funcionario encargado de ésta. El auto que decreta la eliminación será apelable en relación, a menos que el fuere dictado por la suprema corte.

Art. 7.º — El depósito a que se refiere el

inciso 4.º del artículo 3.º garantiza no sólo las responsabilidades del procurador para con sus mandantes, por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de sus funciones, sino de las multas o costas cuando proceda responsabilizarlo personalmente por ellas.

Este depósito no será embargable por otras causas u obligaciones que las determinadas a su destino, y si por tales motivos disminuyera y desapareciera, deberá integrarse dentro de los treinta días subsiguientes, bajo pena de suspensión del procurador, la que será pronunciada de oficio.

No podrá retirarse el depósito mientras no se cancele la inscripción del procurador, o se hayan hecho efectivas las responsabilidades del mismo, en su caso.

Art. 8.º — Los procuradores serán eliminados del registro en los siguientes casos:

1.º Por cancelación voluntaria de la inscripción.

2.º Por reiteradas represiones disciplinarias o una grave incorrección en el desempeño del mandato judicial.

3.º Por condena sobreviniente a causa de los delitos enumerados en el inciso 1.º del artículo 5.º.

4.º Por insanía o incapacidad declarada judicialmente.

En todos estos casos procede la devolución del depósito o de la parte del mismo que no se afectare por alguna de las causas establecidas en el artículo 7.º.

Art. 9.º — Los procuradores serán suspendidos por un término de uno a seis meses, como máximo, "por resolución ejecutoriada de los tribunales federales u ordinarios de la capital y federales de las provincias y territorios nacionales":

1.º En los casos autorizados por las leyes de procedimiento.

2.º Por falta de integración del depósito prescripto en el inciso 4.º del artículo 3.º, en su respectivo caso. No haciéndose la integración dentro del término de seis meses, el procurador será eliminado del registro.

3.º Por haberse dictado auto de prisión preventiva en cualquier proceso criminal.

Los tribunales comunicarán al funcionario encargado del registro de matrículas las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las condenas, las suspensiones, multas o apercibimientos decretados contra procuradores inscriptos, a los efectos de su anotación en el registro y de las medidas que fueran conducentes.

Art. 10. — Los procuradores podrán fijar por contrato la retribución de sus servicios hasta la terminación del juicio, el que deberá formularse por escrito, no admitiéndose otra prueba de su existencia que la exhibición del documento y su autenticación.



Será nulo el pacto de "cuota-litis", y no será permitido contratar la retribución con arreglo al tiempo que dure el asunto.

Art. 11. — Son deberes de los procuradores:

- 1.º Interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar a la misma, salvo el caso de tener instrucciones por escrito en contrario de su respectivo comitente.
- 2.º Asistir, por lo menos en los días designados para las notificaciones en la oficina, a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes.
- 3.º Presentar los escritos debiendo llevar firma de letrado los de demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes en los juicios y, en general, todos los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión, sea suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el actuario, quien certificará en los autos esta circunstancia, sea por la mera ratificación que separadamente se hiciera con firma de letrado.

- 4.º Concurrir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios en que intervengan.
- 5.º Conservar con el mayor cuidado los documentos que les confíen sus clientes y ponerlos en conocimiento del abogado, así como los antecedentes de hecho que les suministren.
- 6.º Requerir y recoger los traslados, exhortos, mandamientos y demás papeles que se refieran a los pleitos.
- 7.º Tener al poderdante y al abogado siempre enterados del curso del asunto.
- 8.º Conservar en buen orden todas las cartas y telegramas que reciban, relativos a los asuntos que les están encomendados.

Art. 12. — Los abogados y los escribanos nacionales que optaran por el ejercicio de la procuración, estarán obligados a

acreditar su respectivo título y presentar el certificado correspondiente al depósito prescrito en el inciso 4.º del artículo 3.º.

Art. 13. — Podrán ser inscriptos también en la matrícula los procuradores y escribanos con título provincial expedido con anterioridad a la presente ley y los que, no teniendo título alguno en las condiciones prescriptas por ella, acrediten, dentro de los seis meses de su promulgación, con los certificados que constaten su actuación continua en los expedientes una práctica judicial de cinco años en el ejercicio de la procuración de los tribunales letrados de la capital, provincias o territorios nacionales y acompañen el certificado de depósito requerido por el inciso 4.º del artículo 3.º.

Art. 14. — El título provincial de procurador o escribano, expedido según las leyes locales, con posterioridad a la presente, habilitará para el ejercicio de la profesión ante los tribunales federales en las provincias donde hubiera sido otorgado.

Art. 15. — Exceptuánse de las disposiciones establecidas en la presente ley las personas de familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. A los mandatarios generales con facultad de administrar, respecto de los actos de administración.

Art. 16. — Los procuradores que intervienen en juicios iniciados antes de la vigencia de esta ley, pueden continuarlos hasta su terminación.

Art. 17. — No rige esta reglamentación para los que han de representar a las oficinas públicas de la nación, de las provincias y de las municipalidades, cuando obren exclusivamente en ejercicio de esa representación.

Art. 18. — Únicamente podrán ejercer la procuración los ciudadanos argentinos o extranjeros naturalizados.

Art. 19. — Esta ley se considerará parte integrante de las leyes de procedimiento para ante los tribunales federales, así como del código de procedimientos para la capital de la república.

Art. 20. — Deróganse todas las leyes de carácter orgánico y procesal que se opongan a la presente.

Art. 21. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en la cámara de diputados, en Buenos Aires, a dos de julio de mil novecientos diez y nueve.

ARTURO GOYENECHÉ.

Carlos G. Bonorino.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Está en discusión en general.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

He de ser muy breve en el informe correspondiente a este proyecto, en



concepto de que la naturaleza del asunto a que él se refiere no reclama la expresión de mayores fundamentos.

El proyecto venido en revisión de la honorable cámara de diputados, tiende a organizar la representación en juicio ante los tribunales en la forma de una profesión reglamentada, a base de aptitud comprobada por parte de los que van a ejercerla y sujeta a fiscalización y responsabilidades, de tal manera que ella constituya un resorte eficaz para contribuir a la acción de una justicia seria, honesta y ordenadamente desenvuelta en la totalidad de sus resortes.

La condición de la procuración reglamentada, ha sido ya satisfecha por varias provincias argentinas, que se han anticipado en este sentido, por los órganos de su legislación local, a atender lo que en el orden federal y dentro de los tribunales ordinarios de la capital es una necesidad cada día más acentuada.

Son, en efecto, varias las provincias que han sancionado leyes reglamentarias del ejercicio de la procuración. Esas leyes han servido de base a las distintas iniciativas presentadas en la honorable cámara de diputados y recogidas oportunamente en los fundamentos principales, en lo que contienen de más acertado y adelantado por el proyecto que ha venido a revisión a esta honorable cámara.

La comisión de legislación del honorable senado, compenetrada de la necesidad de reglamentar la procuración, a efectos de que la representación en juicio satisfaga las exigencias de una buena y eficiente acción de justicia y resguarde, en cuanto sea posible, los intereses que están en litigio, habría deseado no introducir modificaciones, al proyecto venido en revisión, de tal manera que abreviando la tramitación parlamentaria, esta iniciativa quedara consagrada en ley de inmediato. Desgraciadamente no le ha sido posible proceder con ese concepto y ha tenido que introducir y aconsejar al honorable senado que acepte algunas modificaciones que ha considerado indispensables. Esas modificaciones son de orden diverso y no

afectan en su esencia al proyecto venido en revisión, el cual es respetado en sus fundamentos principales y orgánico y en su aspecto general. Son modificaciones, que podría decir, de detalle, aunque revisten importancia por algunos puntos que afectan.

Desde luego, la comisión ha pensado que todo lo que se refiere a la formación del registro de procuradores, otorgamiento de garantías, fianzas, o hipotecas, anotaciones o inscripciones, correcciones disciplinarias, etc., no debía ser atribuido al presidente de la suprema corte de justicia federal y que por mucho que fueran delicadas e importantes estas atenciones, era preferible dejar a la suprema corte de justicia, por la alta representación pública que tiene, en el ejercicio de las funciones que por la constitución y por las leyes orgánicas federales le están conferidas, sin aumentar su labor con otras cargas. Y en concepto siempre de que esta es una ley de carácter federal y a la vez aplicable a los tribunales ordinarios de la capital, ha preferido aconsejar al honorable senado que todas estas funciones atribuidas por el proyecto originario a la suprema corte de justicia, a su presidente o secretario se confieran a la cámara federal de la capital. En ese sentido es la primera reforma que la comisión de legislación aconseja al honorable senado.

Considerando los requisitos necesarios para el ejercicio de la procuración, la comisión ha creído deber aconsejar una modificación encaminada a facilitar la inscripción en la matrícula de procuradores, a personas que teniendo competencia comprobada, teniendo honestidad y capacidad, pudieran no disponer de los recursos necesarios para hacer un depósito en efectivo o bienes disponibles para afectar en hipoteca, garantiendo las responsabilidades que pudieran contraer.

Con ese concepto, entiendo que no debe ponerse en las leyes limitaciones que hagan de una profesión un patrimonio de las gentes más acomodadas y que eliminen del escenario de la competencia profesional, hombres con aptitudes, con preparación y con hones-



tividad, la comisión ha creído deber aconsejar una modificación, autorizando la inscripción, siempre que el procurador ofrezca una garantía solidaria de dos letrados de la matrícula respectiva, a satisfacción del juez o tribunal respectivo y con carácter solidario, de tal manera que en el orden de las garantías materiales la situación vendría a ser esta: el procurador tendría que hacer un depósito en efectivo, o en títulos, por cinco mil pesos en la capital, y una suma inferior en los juzgados federales, o constituir una hipoteca por igual suma, u otorgar una garantía solidaria de dos letrados a satisfacción del tribunal respectivo.

El proyecto de la cámara de diputados prohíbe el ejercicio de la procuración a todos los empleados o funcionarios públicos, nacionales, provinciales, o municipales; la comisión ha creído que debía aclarar estos conceptos, porque tomado el artículo en los términos en que viene redactado, podría entenderse que toda persona que ejerza funciones públicas, de carácter representativo, como miembro del congreso, o de los concejos deliberantes municipales—o simplemente honorarias,—o sin sujeción a disciplinas jerárquicas dentro de oficinas de funcionamiento permanente y con horarios determinados de trabajo, quedaría por ese solo hecho impedido de ejercer la profesión de procurador. No ha entendido la comisión que ese pueda ser el concepto de la ley, y ha creído, en consecuencia, que debía ser aclarado en alguna forma que definiera el pensamiento limitando la prohibición a aquellos funcionarios o empleados que hacen parte del organismo administrativo, dentro de una dependencia jerárquica u otra, con carácter retribuido; de tal manera, no habiendo una expresión de índole legal, o científica, que permitiera precisar exactamente cuales son los empleados o funcionarios a quienes se prohíbe el ejercicio de la profesión de procurador, la comisión ha debido emplear, para expresar este concepto, términos amplios y generales, pero dejando constancia de que la prohibición solo comprende a los empleados administrativos, burocráticos, que tienen

funciones dentro de una organización jerárquica, con hora de oficina y a sueldo, pero que no comprende a los funcionarios públicos que ejercen funciones de carácter representativo u honorario, y a los que no encuadran su situación en los términos enunciados, como los profesores, por ejemplo, respecto de los cuales no existe la incompatibilidad, que en el hecho podría señalarse respecto de los demás empleados.

La comisión ha creído, igualmente conveniente, limitar la exigencia de la firma de letrado en los escritos presentados en los juicios, en los casos que el mismo proyecto determina a aquellos tribunales en que existe un foro con más de cinco letrados, inscriptos en la matrícula y en ejercicio de la profesión. El proyecto, tal cual está concebido y ha venido de la cámara de diputados, imponería la obligación de la firma de letrado en tribunales en los cuales, o no hay letrados, o hay uno, dos o tres, lo cual podría crear dificultades de orden legal y material, y en algunos casos hasta una imposibilidad de hecho, y, en consecuencia, la comisión ha creído deber limitar para los casos a que me refiero, la exigencia aludida, estimándola justa y eficiente para realizar el propósito de asegurar una buena dirección de los juicios, en amparo de los intereses que están en juego, y en consideración al mejor desenvolvimiento de la acción de la justicia.

Por último, la comisión aconseja la supresión del artículo que exige la carta de ciudadanía para el ejercicio de la procuración, entendiendo que esa exigencia es contraria al espíritu de nuestra constitución y al precepto constitucional que consagra la igualdad de todos los habitantes de la república y el derecho de los extranjeros a trabajar y a ejercer todas las industrias y profesiones lícitas.

Tales son, prescindiendo de detalles como la determinación del procedimiento en los casos de suspensión o eliminación de los procuradores, y la limitación, en el texto de la ley de las obligaciones que se les imponen, sin perjuicio de su reglamentación tales,



son, decía, las modificaciones principales que la comisión ha creído deber aconsejar, entendiendo que con ellas reducía al mínimum las reformas, para facilitar la sanción de esta ley en las presentes sesiones parlamentarias, dejando librado al tiempo y la experiencia la indicación de otras modificaciones.

Se consulta así la necesidad de orden permanente que reclama una ley sobre la materia, y el concepto, a la vez, de que su sanción contribuirá a mejorar el ambiente moral de los tribunales, a levantar el nivel en que se desenvuelven muchos asuntos judiciales, a dignificar la profesión y a armar a los jueces de los resortes de autoridad necesarios para mantener la disciplina y la corrección, en garantía de todos y en honor del país, en las tramitaciones judiciales.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Coincido con el miembro informante de la comisión, en que esta ley es benéfica, porque viene a regularizar el ejercicio de una profesión que, hasta el presente, no se había reglamentado, dando ello lugar a que tuvieran intervención en los juicios personas sin ninguna preparación y que, en la mayoría de los casos, entorpecen la marcha de los expedientes; pero, por más que en general esté conforme con las modificaciones aconsejadas, menos con la que suprime la condición de la nacionalidad argentina, tengo el convencimiento de que si se aceptaran las modificaciones que la comisión aconseja, este proyecto no se convertiría en ley y quedaría frustrado un anhelo, que casi puede decirse es público, porque participan de él todos los que tienen que intervenir en asuntos judiciales y notan la intromisión de personas que no reúnen las condiciones más elementales que signifiquen una garantía para los litigantes o quienes tienen derechos que ventilar en los tribunales.

Por eso pienso que el criterio que debe aplicarse en este caso es el mismo que prevaleció con relación al proyecto de reformas a la ley del Banco Hipotecario Nacional, sancionándolo en la forma en que ha llegado de la honorable cámara de diputados y de-

jando las modificaciones para otra ley que pueda dictarse más adelante y que salve también inconvenientes que se adviertan en la aplicación de ésta.

Obrar de otra manera sería retardar el imperio de una ley, que, como ha dicho el señor miembro informante, es urgentemente reclamada para sanear la profesión de procurador.

En razón de esto, después de votarse en general, el proyecto, haré indicaciones encaminadas a que se adopte el procedimiento que dejo enunciado como más práctico.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar en general.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Está en discusión en particular.

**Sr. Melo.** — Con relación a la primer reforma que proyecta la comisión, haré la cuestión en el artículo segundo, porque el primero no está reformado.

—Se lee el artículo 1.º y se aprueba.

—Se lee el artículo 2.º.

**Sr. Llanos** — Pido la palabra.

En mi concepto el artículo segundo tal cual ha venido de la cámara de diputados y por el cual se encomienda al secretario de la suprema corte nacional a llevar un registro de procuradores, es más conveniente que la reforma que introduce la comisión.

En todas las provincias donde está reglamentado el ejercicio de la procuración, puedo citar la provincia de Buenos Aires, la de Jujuy y la de Santiago del Estero, cuyas leyes he tenido a la vista, encomianda esa función al secretario del superior tribunal de la respectiva provincia; y la razón fundamental es que la suprema corte nacional está en comunicación directa con todos los tribunales de la República, y entonces es de ahí de donde deben partir las comunicaciones a los demás tribunales de las provincias, sobre las personas que están en situación de desempeñar las funciones de procuradores.

Por estas breves consideraciones,



voy a votar en contra de la reforma que proyecta la comisión de legislación.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

Al informar en general el proyecto, he tenido oportunidad de expresar las razones de la modificación aconsejada por la comisión.

La suprema corte de justicia nacional tiene dentro de nuestro régimen institucional, una representación tan alta y tan respetable que me parece, no debe ser colocada en igualdad de situación de las que tienen a su turno en el régimen interno de las provincias, las supremas cortes y los tribunales de apelación. En atención a ese distinto carácter, parece más propio que funciones de esta índole, que son en cierto modo de carácter material como lo es el de llevar registro, anotar correcciones y medidas disciplinarias contra los procuradores, la de intervenir en el otorgamiento de fianzas o hipotecas, retiros de los depósitos que hagan los procuradores, etcétera, se confieran a otro funcionario caracterizado y representativo también, y que esté colocado en la misma categoría de los tribunales de apelación de las provincias y de la misma capital y no al presidente de la suprema corte nacional.

La suprema corte de justicia nacional, por razón de sus funciones de carácter constitucional que desempeña, debe en mi concepto, ser mantenida en el nivel superior que le asigna la constitución y las leyes orgánicas de carácter general sin inmiscuirse en estos detalles de la organización profesional de la procuración, cosa que puede ser conferida sin perjuicio ni inconveniente alguno a otros tribunales caracterizados y respetables, en situación de ejercer estas funciones con todo acierto y eficacia. La comisión ha aconsejado esta modificación creyendo también que la cámara de apelaciones de la capital está en situación de comunicar fácilmente, dentro del orden normal de las relaciones con todos los demás tribunales de apelación de las provincias.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

El proyecto en revisión no encomienda esas funciones al presidente de la

suprema corte de justicia, sino al secretario, o funcionario que la misma indique.

Lo que este proyecto quiere es que el registro de procuradores esté bajo el contralor, vigilancia y superintendencia de la suprema corte de justicia nacional. Esta, al ejercer esas funciones, no disminuye en nada la jerarquía que le confiere la constitución; de tal manera que no veo ningún inconveniente en que se mantenga el proyecto venido en revisión.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra, para hacer una breve observación en respuesta a lo manifestado por el señor senador por Santiago del Estero.

Todo el pensamiento de la ley está coordinado en una serie de artículos concordantes y si es cierto que establece que el secretario de la suprema corte es el que ha de llevar el registro de procuradores, también es exacto que aquel funcionario depende del presidente, y en las disposiciones restantes, más adelante se especifica que es a la orden del presidente que han de hacerse los depósitos u otorgarse hipotecas.

**Sr. Melo.** — Tanto por la consideración ya enunciada de que cualquier reforma dejaría sin que se convirtiera en ley este proyecto, como por las que acaba de expresar el señor senador por Santiago del Estero, y otras que voy a agregar, creo preferible votar el despacho de la cámara de diputados.

El despacho de la cámara de diputados, según lo ha dicho el señor senador por Santiago del Estero, no entrega a la suprema corte, sino a la secretaría o al funcionario dependiente de este mismo tribunal, que ella designe la organización del registro de procuradores. ¿Quién lleva actualmente el registro de abogados? La suprema corte. De manera que se aplicaría un criterio doble aceptando las modificaciones, o sea: registro de abogados en la suprema corte y registro de procuradores en la cámara federal. A esa circunstancia se agrega, que quien ejerce la superintendencia en grado superior, es la suprema corte; de modo que vendríamos a cercenarle atribuciones de su superintendencia y, finalmente mili-



ta otra consideración. y es que dependen también de la suprema corte los inspectores de justicia, y por intermedio de ellos podrá fácilmente ejercer el contralor y hacer efectivas las funciones de superintendencia encomendadas por el artículo 2.º del proyecto de la cámara de diputados, en cualquiera de los territorios nacionales, mientras que las funciones de cada cámara se limitarían al territorio adscripto a su radio de jurisdicción para las apelaciones.

Por estas razones, considero preferible el proyecto venido en revisión de la cámara de diputados, al despacho proyectado por la comisión de legislación del honorable senado.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el despacho de la comisión, y si fuese rechazado, se votará el artículo tal como viene de la honorable cámara de diputados, y de acuerdo con lo propuesto por los señores senadores por Santiago del Estero y Entre Ríos.

—Se vota, y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el artículo 2.º del proyecto venido en revisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 3.º

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Me voy a permitir hacer algunas observaciones al inciso 4.º de este artículo, tanto a las modificaciones introducidas por la comisión de legislación cuanto por el mismo proyecto venido de la cámara de diputados.

La reglamentación de la procuración no es nueva en el país, y es extraño que se haya tardado tanto, nada menos que en la capital de la república, en dictar una ley que garantice la seriedad con que debe ejercerse esta alta función de procurador, al que se confían intereses tan valiosos.

En las provincias del norte, en el litoral, se ha reglamentado la procuración, y la han reglamentado prolijamente, estableciendo requisitos que garantan no solamente su competencia, no solamente su seriedad, sino también

la responsabilidad pecuniaria y moral para hacer efectiva cualquier sanción que recayera sobre ellos, con motivo del mal desempeño de sus funciones. En Santiago del Estero, cuya ley se ha inspirado en la de Córdoba, se exige una doble garantía personal y una garantía real; la real, limitada a quinientos pesos, y la personal de dos mil quinientos pesos; y tiene por objeto al establecer esas dos clases de fianzas, para no verse obligado a seguir una tramitación larga, una tramitación costosa; para hacer efectivas responsabilidades insignificantes, como sería, por ejemplo, la de la multa, la reposición de papel sellado. Entonces, se exige ese depósito de quinientos pesos, para que con una simple orden del juez, o del superior tribunal, sea extraída del banco de la nación argentina y pagada esa multa o hecha la reposición de papel sellado.

Yo he de votar, señor presidente, por que para la capital de la república, territorios nacionales y juzgados de sección se establezca esa misma forma de fianza, y que no se limite a la fianza personal, que la dan dos abogados de la matrícula, porque no hay razón de ninguna clase para exigir una fianza como esa para responder a la cantidad insignificante de 5.500 pesos; no hay razón tampoco plausible, — al menos yo no la descubro, — para excluir a toda otra persona de responsabilidad y exigir únicamente que sea abogado de la matrícula.

Entonces, yo propongo que el inciso 4.º diga que se exige 5.000 pesos en garantía personal o mil pesos en efectivo, depositados en el Banco de la Nación Argentina, y que la fianza personal la dará cualquier persona que, a juicio del superior tribunal o del juez, en su caso, sea suficientemente responsable.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

El inciso 4.º del despacho sancionado por la cámara de diputados, satisface las observaciones que acaba de formular el señor senador por Santiago del Estero, porque exige un depósito en efectivo. De manera que con ese inciso quedan ellas salvadas; y tanto por esa



circunstancia, cuanto porque, como ya he dicho, cualquier modificación que se haga al proyecto, impediría su inmediata sanción, me parece que es preferible votar el inciso 4.º del despacho de la cámara de diputados y no el proyectado por la comisión, dado que además de las observaciones del señor senador por Santiago del Estero, daría lugar a que se retardara la sanción de esta ley.

**Sr. Llanos.** — No satisface en manera alguna, porque el proyecto venido en revisión exige que sea en efectivo, que sea una garantía. real.

**Sr. Zabala.** — Pido la palabra.

Si se introducen las modificaciones que indica el señor senador por Santiago del Estero, que encuentro muy razonables, este proyecto no se va a sancionar este año, y vamos a quedar sin reglamentación de ninguna clase con los lamentables inconvenientes que se notan y agravan diariamente.

He de votar de acuerdo con el criterio que ha informado la exposición hecha por el señor senador por Entre Ríos; aunque encuentro muy plausibles las observaciones que hace el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

Me parece conveniente que la cámara establezca de una vez por todas en la discusión en particular de este proyecto, el criterio con que ha de considerarlo. Si ha de predominar la tesis sustentada por el señor senador por Entre Ríos, que acaba de apoyar el señor senador por Jujuy, me parece que más conveniente sería votar a libro cerrado, como un código, el proyecto venido en revisión, porque si no vamos a vernos coartados o cohibidos en nuestra iniciativa al proponer reformas, la comisión en primer término, y vamos a tropezar en todos los casos con la resolución de muchos señores senadores de votar en contra de las reformas, porque quieren la inmediata sanción de la ley, y resultaría, entonces, inútil la discusión.

**Sr. Zabala.** — Efectivamente.

**Sr. Roca.** — La comisión, al estudiar este proyecto de ley, tuvo en el

primer momento la intención y el propósito de formular el menor número de reformas posibles, considerando que la ley era en general buena y que era preferible obtener su sanción, a fin de que se convirtiera inmediatamente en ley. Pero encontramos algunas disposiciones, a las cuales tuvimos que formular reparos y convinimos, los miembros de la comisión, en que era indispensable proponer algunas modificaciones. Ya en ese camino, naturalmente, abordamos la reforma de algunas otras disposiciones que encontramos preferible que fueran modificadas, pero que sancionadas en la forma en que lo han sido por la cámara, no quedaría afectada en el fondo la bondad y calidad misma de la ley.

De modo, señor presidente, que si ha de hacerse la discusión con el criterio planteado por los señores senadores por Entre Ríos y por Jujuy, sería mejor que la cámara resolviera para evitar largas discusiones en particular, ya que no darían ningún resultado y así quedaría mejor establecido el criterio y la necesidad de rever el año próximo este proyecto sancionando las modificaciones que fueran indispensables y convenientes.

He de referirme a algunas cláusulas que el señor senador por Entre Ríos no encontraba susceptibles de modificación y que la comisión ha debido introducir, como la que se refiere a la nacionalidad o ciudadanía para el ejercicio de la procuración. La comisión ha entendido que esta limitación afectaba prescripciones constitucionales y limitaba el derecho de libertad de comercio e industria y que por lo tanto, no podría pasarla en silencio, sin formular algunas observaciones a ese respecto. Quizá este artículo es el que ha determinado las demás reformas propuestas por la comisión.

Como digo, yo preferiría que se votara a libro cerrado este proyecto de ley, con el cual no tendríamos que reproducir la defensa de algunas de las modificaciones propuestas por la comisión.

**Ss. Melo.** — Me parece muy prácti-



ca la indicación del señor senador por Córdoba y, por consiguiente, si él la concreta, la voy a votar.

**Sr. Roca.** — Yo no desearía proponerla.

**Sr. Melo.** — Precisamente, mi fundamental observación se refiere a la supresión del artículo 18 del proyecto de la cámara de diputados que establecía como condición para ejercer la procuración, el ser ciudadano argentino o extranjero nacionalizado. Disiento en absoluto del criterio de la comisión, pues ella considera la procuración como un negocio, como un comercio o como una industria, y esto es olvidar la función del procurador, que es la clásica asignada por las leyes de Partida y de Indias, o sea la de un verdadero auxiliar de la justicia, y en cierto modo, un funcionario colaborador para la regular tramitación de los juicios, y siendo así, es imposible suprimir esa exigencia tan prudente y razonable que establecía el artículo 18.

Dejo con esto explicado el motivo que he tenido para anticipar a la comisión mi desconformidad con el artículo 18.

Entonces voy a formular moción para que la cámara, por una votación, resuelva si ha de tomar como base para la sanción, el despacho de la comisión o el despacho de la cámara de diputados, ya que hay un miembro de la comisión que ha manifestado preferencia por ese procedimiento, como más práctico.

**Sr. Roca.** — Lo que yo he indicado, no propuesto, desde que como miembro de la comisión he firmado el despacho que aconseja reformas, es que si los señores senadores en su mayoría tienen como base de criterio para no aceptar las modificaciones de la comisión, el anhelo de que este proyecto se convierta en ley y no sufra las contingencias de no poder ser tratado por la cámara en las sesiones ordinarias, sería mejor que propusieran que fuera tratado como un código, es decir, a libro cerrado en una sola votación. De otra manera, si vamos a librar el debate a las contingencias de que se acepte o no el proyecto de la comisión, vamos a hacer un

debate casi inoficioso; pero como miembro de la comisión, que ha propuesto reformas al proyecto venido en revisión, no puedo formular una moción que sería contraria al proyecto despachado, que yo he firmado.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

La capital ha vivido 110 años sin tener reglamentada la procuración, y no me explico cómo se pueda hacer un argumento de apremio, para sancionar una ley sin discutirla con toda la amplitud y detención con que debemos hacerlo.

A parte de que si examinamos el proyecto en conjunto, hay un artículo por el que se despoja toda importancia a este proyecto, y en mi concepto, más valiera no reglamentar la procuración, si han de tener acceso y ser inscriptos todos los que, por cualquier concepto, han ejercitado la profesión durante cinco años; si ese artículo va a ser aprobado, no veo la urgencia de que lo consideremos ahora mismo. Yo pienso que a esta ley, si no la podemos estudiar con toda detención en el presente período de sesiones, sería preferible dejarla para el año entrante, pues si se ha pasado 110 años sin tener esta ley, bien se puede pasar uno más.

**Sr. Melo.** — Hago indicación para que se traten en conjunto las modificaciones propuestas por la comisión, y si ellas son rechazadas que se efectúe la votación sobre el proyecto venido de la cámara de diputados.

**Sr. Llanos.** — Tenemos que considerarlas y votarlas una por una.

**Sr. Presidente (Villanueva)** — Si el señor senador por Santiago del Estero pide que se voten las modificaciones una por una, así se tendrá que hacer.

**Sr. Llanos.** — Que se vote por partes y escuchando a los señores senadores todas las observaciones que se les ocurra hacer, y si no hay tiempo para hacerlo así, que se postergue para el año entrante.

**Sr. Gallo.** — Las consideraciones que ha hecho el señor senador por Córdoba, son muy atinadas.

Parece que convendría sobre la ba-



se de ellas que se produjera un pronunciamiento del senado para despejar la situación de la misma comisión. No tengo objeto, en realidad, estar haciendo un debate sobre cada una de las reformas propuestas por la comisión, y sobre las que a su turno pueda presentar a la cámara cualquiera de los señores senadores, en ejercicio de su derecho, si el propósito del senado fuera aprobar el despacho venido en revisión, para que fuera convertido en ley. Si en el espíritu de la mayoría del senado es ese el propósito, convendría dejarlo establecido como lo ha indicado el señor senador por Córdoba, con lo que ganaríamos tiempo suprimiendo un debate sin objeto y quedaríamos mejor habilitados para tratar oportunamente las reformas a que se refería el señor senador por Entre Ríos, con lo cual estaríamos a la vez en condiciones de pasar a considerar de inmediato otros asuntos.

**Sr. Castañeda Vega.** — Creo que es imposible evitar la discusión, porque las opiniones distintas expresadas por los señores senadores no representan la opinión del honorable senado, sino la de cada uno de los que las han emitido.

Basta la manifestación de uno de los señores senadores de que debe introducirse una modificación, para que no pueda prosperar una moción de tratar el despacho a libro cerrado.

Por consiguiente, yo creo, que la votación debe hacerse en el orden que manda el reglamento.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar, entonces, el artículo de la comisión, a no ser que la moción del señor senador Melo haya sido apoyada.

—Apoyada.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Si no se aceptase la indicación del señor senador por Entre Ríos, se votará la del señor senador por Santiago del Estero, de que se discuta y vote artículo por artículo.

**Sr. Castañeda Vega.** — El proyecto

que está en discusión, está siguiendo su trámite ordinario, ajustado al reglamento, y, entonces, no tiene que ser ese trámite reforzado por ninguna moción. Y, en cambio, habría que apartarse del reglamento, para cerrar el debate y hacer que prosperara la moción de que se vote a libro cerrado.

Se ha votado en general y se está discutiendo y se está votando en particular.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se ha votado el artículo 2.º. Correspondería votar ahora el artículo 3.º.

**Sr. Llanos.** — La modificación que propongo se refiere al artículo 3.º.

**Sr. Gallo.** — Y es que la fianza debe consistir en cinco mil pesos de fianza personal, y mil pesos en efectivo depositados a la orden del presidente de la suprema corte.

**Sr. Melo.** — Entonces se votará primero el despacho de la comisión, y si este no fuera aceptado, la modificación propuesta por el señor senador por Santiago; y por último la indicación que he formulado, de que se mantenga el artículo, tal como viene de la honorable cámara de diputados.

**Sr. Gallo.** — La modificación introducida en este artículo por parte de la comisión, obedece al propósito de no cerrar las puertas del ejercicio de la procuración a personas que, teniendo competencia bien comprobada y honestidad, carecieran de recursos para constituir la fianza en efectivo.

Su fianza personal es también una garantía y si se ha determinado que ella será otorgada por dos letrados de la matrícula, por igual suma, a satisfacción de la autoridad judicial respectiva, es porque le será más fácil a aquellos y ejercer mejor control. Hay ciertas consideraciones de orden moral vinculadas al desempeño profesional, bajo la autoridad de los jueces que obligarían a cuidarse más solícitamente a los firmantes letrados, frente a cualquier eventualidad que hiciera necesaria la efectividad de la fianza.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se



va a votar el despacho de la comisión. Si no es aceptado, se votará el proyecto venido de la cámara de diputados con la modificación propuesta por el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Melo.** — Se puede votar sin la modificación.

**Sr. Castañeda Vega.** — Se debe votar con la modificación.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el despacho de la comisión y si no es aceptado se votará como viene de la cámara de diputados y con la modificación propuesta por el señor senador por Santiago del Estero.

—Se vota, y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el proyecto venido de la cámara de diputados con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa de 9 votos; votan 16 señores senadores.

**Sr. Zabala.** — Hagó moción de reconsideración del artículo segundo, porque los que hemos votado ese artículo lo hemos hecho creyendo que se mantendría el mismo criterio para los demás artículos.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar la moción de reconsideración.

—Se vota, y resulta negativa.

—Se lee el artículo 3.º.

**Sr. Gallo.** — En este artículo hay que introducir una reforma como consecuencia de la sanción que acaba de hacer el honorable senado sobre el artículo tercero. Habrá que poner “Presidente de la Suprema Corte de Justicia”, como estaba en el proyecto en revisión.

**Sr. Zabala.** — Por eso creía más conveniente reconsiderar las sanciones anteriores.

**Sr. Melo.** — Lo que se ha sancionado no es el despacho de la comisión, sino el proyecto de la cámara con la modificación propuesta por el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Gallo.** — La modificación se refiere a la fianza.

**Sr. Llanos.** — Lo demás es de forma; pero este artículo hay que concordarlo con los demás.

**Sr. Gallo.** — La reforma debe ser de carácter general para todos los demás artículos, poniendo “Suprema Corte”, en lugar de “Cámara Federal”.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se hará la corrección.

—Se lee el artículo 4.º.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Si la comisión no tuviese inconveniente, y digo esto porque no he de hacer mayor oposición, en el artículo 4.º podríamos establecer que tratándose de los ujieres de los tribunales, no se exigiera sino dos años en el ejercicio del empleo. Hay a este respecto el antecedente del artículo 6.º de la ley 8 de octubre de 1813, de la provincia de Buenos Aires. De manera que se podría exigir a los demás empleados inferiores cinco años, como lo determina el artículo, pero tratándose de los ujieres solamente dos años.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

La comisión, con la reforma introducida a este artículo, ha procurado colocar en la misma situación a los que han ejercido la procuración y a los empleados judiciales.

Los empleados judiciales, según el proyecto de la cámara de diputados, debían tener diez años de práctica; la comisión ha creído justo reducir el término a cinco años, entendiendo que ese era un término discreto para habilitar a un empleado a fin de que pueda ejercer debidamente las funciones de apoderado en juicio.

Un término más breve, podría acaso ser insuficiente para crear la preparación de idoneidad que el proyecto tiende a asegurar, y a la vez determinaría una desigualdad que no estaría en relación con la situación de las demás personas a quienes se autorizan también a ejercer la procuración.



**Sr. Llanos.** — Como ya lo he manifestado, aconsejaba esa modificación en caso de que la comisión aceptase; pero, no insisto.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Está en discusión el artículo 5.º con las modificaciones introducidas por la comisión.

**Sr. Llanos.** — La comisión ha empleado la frase “hagan parte”, si mal no recuerdo, y creo que debe sustituirse por “formen parte”. Es en el inciso tercero.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — No sé si la comisión acepta.

**Sr. Gallo.** — No hay inconveniente.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por Santiago del Estero y aceptada por la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se aprueba el artículo 6.º.

—En discusión el artículo 7.º.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra. —

Entiendo que el término que se fija a los procuradores para que reintegren la fianza, es excesivo. La de varias provincias donde está reglamentada la procuración, exigía cinco a ocho días a este objeto y no debe darse mayor término porque se permitía ese ejercicio durante treinta días sin tener fianza, y precisamente, se quiere evitar que personas sin responsabilidad ejerzan la profesión. Me parece que cinco días es suficiente para que se restablezca su fianza o la reintegren.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Gallo.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el artículo con las modificaciones propuestas por el señor senador por Santiago del Estero, y acep-

tadas por la comisión, fijando cinco días.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 8.º.

—Se lee el artículo 9.º.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Es entendido que todos los artículos que se votan, son con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Se vota y aprueba el artículo 9.º.

—Se lee el artículo 10.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — En este artículo no hay ninguna modificación.

—Se vota el artículo 10 y se aprueba.

—Se lee el artículo 11.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Al final de este artículo hay un agregado.

**Sr. Roca.** — Podrían leerse las modificaciones.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Sírvase leer el señor secretario.

—Se leen.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Yo creo que en todos los casos debe exigirse, señor presidente, la firma de letrado en los escritos determinados. No hay ninguna razón para eximirlos en los territorios nacionales, que es donde hay un verdadero peligro en que puedan ejercer la procuración quienes no hayan cumplido con los requisitos que exige esta ley; sobre todo, si aun en los casos en que la ley faculta comparecer en juicio sin necesidad de valerse de terceros, los jueces pueden obligarles a que lo hagan, cuando el procedimiento que observan no es regular, y si esto puede suceder aún en la capital de la república, con mayor razón debe exigirse en los territorios nacionales.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

La comisión, al aconsejar esta reforma, ha contemplado la situación



especial en que se encuentran algunos territorios nacionales, en los cuales no hay un foro suficiente. Me han informado que en algunos territorios nacionales no existe sino un abogado, y otros en que hay dos o tres letrados:

¿Cómo hacer obligatorio el uso de la firma de letrado si no los hay? ¿Cómo hacer obligatorio el uso de la firma de letrado, donde no hay sino tres o cuatro, que pudieran estar inhabilitados por razones de intereses, enemistados o situaciones de familia?

Contemplando esa situación, y entendiendo, además, que es un principio de buena organización, que conviene establecer, la exigencia de la firma de letrado, es que la comisión ha creído haber limitarla a aquellos casos en los cuales existen matriculados abogados en número no inferior a cinco; es un número discreto, que permite pensar que hay un foro habilitado para patrocinar libremente a todos los que quieran ejercer la procuración.

De manera que la comisión, por estas circunstancias, mantiene su despacho.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el despacho de la comisión, y si no se acepta, se votarán las modificaciones propuestas por el señor senador por Santiago del Estero.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Está en discusión el artículo 12 y se va a leer la modificación propuesta.

**Sr. Llanos**. — Pido la palabra.

Del texto de este artículo, parecería desprenderse que los abogados que aceptasen la representación o que optasen por el ejercicio de la procuración, como dice el artículo, no podrán ejercer la profesión de abogado. Si ese es el alcance me parece que el artículo es inaceptable.

**Sr. Gallo**. — No es ese el alcance del artículo. La comisión ha contemplado el caso del abogado que ejerciera la representación en juicio, lo que no les impediría que en otros casos actuaran como abogados; entendi-

do que todos los que ejerzan la representación, deben estar en igualdad de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rijan las respectivas profesiones.

**Sr. Llanos**. — Salvada esa observación, me voy a permitir hacer otra. Yo creo que al abogado no debe exigírsele fianza de ninguna clase, para que pueda representar en juicio. En primer lugar, porque su condición de abogado ya es de por sí suficiente responsabilidad, y, en segundo lugar, porque solamente por excepción aceptan poderes, en casos sumamente raros, porque les conviene siempre tener su procurador y cuando algunas veces aceptan mandatos, es por pedido especial del cliente; en otros casos, no aceptan.

Además, esto tiene sus precedentes; en la provincia de Buenos Aires no se exige fianza al abogado que representa en juicio; en Santiago del Estero tampoco, en Córdoba tampoco, y me parece que no debemos desechar estos precedentes que tienen muchísima importancia y que no han sufrido fallas en su aplicación, desde la época en que esas leyes están en vigencia.

**Sr. Gallo**. — La exigencia de la fianza, se ha hecho extensiva a todos los que hayan de ejercer la representación en juicio, para mantener la situación de igualdad. Son dos profesiones distintas, la del abogado y la del procurador, y así como va a exigirse una fianza al procurador que tiene notoriamente responsabilidad material superior a la de muchos letrados, no habría razón para que, por la simple presunción que un letrado, por el título que inviste, ha de tener los medios materiales para hacer frente a cualquier responsabilidad, se cree a favor de ellos una excepción que no estaría amparada por el respeto debido al principio de igualdad.

La profesión de abogado es cierto que se ejerce con independencia de la procuración y que no es frecuente que los abogados actúen también como procuradores, pero hay situaciones en que las funciones están invertidas y



en las cuales los abogados también trabajan representando en juicio.

Son profesiones distintas, repito, y parece natural dejar a cada una con su propia órbita de acción, dentro de las garantías y las limitaciones que las leyes respectivas les asignen, hasta tanto se reglamente la de abogado, lo que no tardará en hacerse, seguramente; esa sería la oportunidad de establecer las limitaciones respectivas de otro orden. Entre tanto, la comisión cree que a este respecto, debe mantener el despacho en la forma que ha venido de la cámara de diputados.

**Sr. Llanos.** — Mantengo las observaciones, señor presidente, y las robustece las declaraciones que hace el señor senador Gallo.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota, y dice el

**Sr. Secretario (Ocampo).** — Afirmativa de 10 votos.

**Sr. Zabala.** — Pido la palabra.

Para pedir que se reconsidere el artículo 4.º, inciso tercero. En el inciso 4.º del despacho de la comisión, se establece, con toda claridad, cómo se ha de constituir la fianza. El senado ha sancionado una modificación de esa disposición a indicación del señor senador por Santiago del Estero, en el sentido de que la fianza ha de ser personal y por cinco mil pesos, pero efectiva por mil pesos. Yo considero que es inconveniente la modificación y creo que debe reconsiderarse el inciso cuarto y votarse el despacho de la comisión.

**Sr. Melo** — Voy a votar la indicación del señor senador por Jujuy, porque habiendo prevalecido el criterio de aceptar modificaciones a la ley, me parece que lo aconsejado por la comisión de legislación es más práctico y más justo y a la vez armoniza los intereses a tutelar y asegura las garantías necesarias. De manera que, colocados en la corriente de aceptar reformas, voy a dar mi voto a favor de la indicación del señor senador por Jujuy.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a votar si se reconsidera el inciso 4.º del artículo tercero.

—Se vota, y resulta afirmativa de 13 votos.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Ha habido los dos tercios que se requieren. Está nuevamente en discusión el inciso 4.º del artículo tercero.

**Sr. Roca.** — Habría que modificar en el inciso 4.º del proyecto de la comisión la parte que dice: “constituir a la orden del presidente de la Suprema corte” como lo ha indicado el señor senador por la capital.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a votar con la modificación propuesta por el senador por Córdoba.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — En discusión el artículo 13. Se van a leer las modificaciones de la comisión.

**Sr. Secretario (Ocampo).**—Después de las palabras “provincias y territorios nacionales” y en reemplazo de lo cual, lo siguiente: “llenar la exigencia del depósito, hipoteca o fianza, prescripta por el artículo 3.º, inciso...”

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a votar.

—Se vota, y resulta afirmativa, así como los artículos 14, 15, 16 y 17, que no tienen modificaciones de la comisión.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a leer el artículo 18. Está modificado.

—Se lee:

**Sr. Gallo.** — La redacción de este artículo tiene que ser modificada por la necesidad de ajustarlo a la modificación introducida en el artículo 3.º; en lugar de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital debe ser la Suprema Corte de Justicia y las comunicaciones han de hacerse a las Cámaras de Apelaciones.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.



Estoy conforme con las modificaciones de redacción que indica el señor miembro informante de la comisión, pero debo hacer notar que es en este artículo donde se ha suprimido la exigencia del artículo 18 del proyecto de la cámara de diputados, que establecía que únicamente podían ejercer la procuración los ciudadanos argentinos o extranjeros naturalizados.

Ese artículo 18 ha sido sustituido por el que acaba de leerse, que nada dice respecto de la ciudadanía de los que quieran ejercer la procuración y, entonces, pido que se incorpore al proyecto de la comisión en su final la disposición contenida en el artículo 18 del proyecto en revisión.

Al formular esta insistencia, vuelvo a recordar que no se trata del ejercicio de comercio o industria sino de funciones ante los tribunales y que debe distinguirse la procuración del mandato ordinario, pues la procuración en juicio lleva el concepto de funciones auxiliares de la justicia. Tal fué el concepto tradicional asignado en las Leyes de Partida y de Indias y el que está incorporado a otras legislaciones como la de Francia y que debemos adoptar en la nuestra, principalmente en estos momentos en que la profesión de procurador se está ya enseñando en varias universidades, en las que se han iniciado cursos para dar la enseñanza necesaria, lo que nos impone la obligación de colaborar en esta obra de depuración y mejoramiento.

Me parece que sería incurrir en un grave error suprimir dicha condición en nuestro país, mucho más necesaria que en cualquier otro dada la composición cosmopolita de la población, y las puertas abiertas para la emigración que hace a la vez que haya extranjeros muy buenos y muy dignos, y los haya muy malos.

La exigencia de la nacionalidad se ajustaría a la tradición de la legislación española, cuyas leyes de Partida y de Indias juzgaban al personero o procurador ayudador de la justicia, prohibiéndole recibir dádivas para alargar los pleitos.

**Sr. Llanos.** — Por el tratado de Montevideo, pueden ejercer la profesión de abogado los que tengan títulos de tal, expedidos por las universidades de los países adheridos a él, sin otro requisito. No me parece que sea correcto exigir la condición de ciudadano al procurador, cuando no se le exige al abogado que también puede representar un juicio. Enterado también que nuestra facultad de derecho expide títulos de abogado a los ciudadanos extranjeros, sin exigirles carta de ciudadanía.

**Sr. Melo.** — Unicamente pueden venir los abogados de las pocas naciones sudamericanas que han ratificado los tratados, y, en ese caso, se trata de una excepción que se explica, pero no puede generalizarse para todos los extranjeros que vengan a este país.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

Yo entiendo que la comisión debe sostener su artículo y que son de peso las razones que abonan la modificación propuesta a la sanción de la cámara de diputados, porque, aparte de la amplitud de prescripciones constitucionales, existen otras razones que también amparan al extranjero que quiere ejercer la profesión de procurador.

Si el señor senador por Entre Ríos, al llamar a los procuradores auxiliares de la justicia, ha entendido que desempeñan funciones de carácter público, hay que tener en cuenta que la constitución no establece más requisitos para el ejercicio de los empleos públicos que el de la idoneidad.

Por otra parte, la observación del señor senador por Santiago del Estero, es perfectamente exacta, no solamente pueden ejercer la profesión de abogado los abogados diplomados en las universidades extranjeras, sino que pueden ejercerla también los extranjeros diplomados en las universidades argentinas, sea cual fuere su nacionalidad; de manera que la limitación no existe para los abogados si se tiene en cuenta que la ley autoriza a los abogados el ejercicio de la procuración, y resultará entonces establecida esta li-



mitación para los procuradores, no existiendo para los abogados.

La observación que ha hecho el señor senador por Entre Ríos de que se trata de un país cosmopolita, me parece que es en favor del sostenimiento del despacho de la comisión.

En efecto, en colonias del origen más diverso, algunas pequeñas, con conocimiento imperfecto del idioma, es natural que los hombres que las componen, prefieren confiar la representación de sus intereses a hombres de la misma nacionalidad, cuyo idioma conocen, y que, por consiguiente, le inspiren mayor confianza.

Este artículo no me es simpático, porque me parece que un país que llama a todos los habitantes que quieran habitar su suelo, no se debe poner estas limitaciones para el ejercicio de una industria, de una profesión, que se basa precisamente en la confianza personal.

Por estas razones es que, la comisión mantiene su despacho.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

La declaración que hace la Constitución de que todos son admisibles para los empleos públicos, sin otra condición que la idoneidad, es en favor del ciudadano. Así lo han entendido todas las leyes reglamentarias para el desempeño de los empleos públicos, en los cuales se exige la ciudadanía. De manera que el argumento del señor senador, falla por su base.

**Sr. Roca.** — Son leyes recientes.

**Sr. Melo.** — Son leyes dictadas en virtud de las facultades interpretativas de la constitución que tiene el congreso. Por eso entre los derechos civiles reconocidos a los extranjeros, por el artículo 20 de la Constitución, no figura el de desempeñar empleos sin otra condición que la idoneidad.

Es verdad que por una deficiencia no se exige a los abogados extranjeros para el ejercicio de su profesión, la ciudadanía argentina. Pero aun cuando no existen leyes que distinguir la situación de las personas que tienen un diploma universitario, con la de los recién llegados que toman

poderes y se dedican a ejercer las funciones de procurador.

Por último insisto que, dentro de las organizaciones judiciales modernas, se considera siempre a los procuradores como auxiliares de la justicia, porque en cierto modo desempeñan una función de colaboración, y entonces encuentro que es lógico exigirles la ciudadanía para que puedan llenarla si en leyes extranjeras no se enuncia la nacionalidad como condición expresa, es porque se mira como implícita, para toda función.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

Para mí, señor presidente, el caso objeto de este debate está regido por el artículo 20 de la constitución que consagra el derecho del extranjero a ejercer toda clase de industria, comercio o profesión.

La comisión no ha podido, por cierto, equiparar el ejercicio de la representación en juicio, con un comercio o industria; le ha dado el verdadero concepto intelectual y de orden moral, que especialmente le corresponde.

Entendiéndolo así, me parece que el artículo del proyecto de la cámara de diputados no se ajusta ni al espíritu de nuestra constitución que es de atracción del extranjero para radicarse en tierra argentina, al amparo de las mayores garantías, ni al texto mismo de la constitución, que bien clara y terminante es a este respecto. Coincidiendo en el mismo orden de apreciaciones del señor senador por Córdoba y evitando repeticiones, habré de decir que si tenemos interés en atraer al inmigrante para que trabaje la tierra e implante industrias en competencia con el criollo, y se convierta en factor de riqueza y engrandecimiento material, no debemos poner dificultades de ningún género, para que vengan a trabajar: y sean elementos de cultura, u otras esferas más elevadas, a los mismos extranjeros que les exijan garantías, que se hagan efectivas las responsabilidades a igual que a los nacionales, eso sí; ningún privilegio a su favor, pero sí



la situación de igualdad en cuanto a garantías y responsabilidades.

Por estas consideraciones, no adhiero a la modificación y mantengo el despacho de la comisión.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra, para una ligera aclaración.

El artículo 20, desde que se dictó la constitución, ha sido interpretado, en el sentido que cuando habla de profesiones, no se refiere a las liberales ni a las reglamentadas, y es por esa razón que si se presenta un médico o abogado con diploma expedido en cualquier universidad extranjera antes de ejercer la profesión, tiene que rendir un examen de revalidación. Si el artículo 20 tuviera el sentido que le da el señor senador por la capital, cuando alude a profesiones, serían inconstitucionales todas las leyes que exigen ese examen; de manera que en una serie de leyes el congreso argentino ha dejado establecido cuál es el pensamiento de la constitución y cuáles sus propósitos, y precisamente ese pensamiento y esos propósitos son en defensa de la nacionalidad argentina y para asegurar la depuración de elementos que se incorporen a su población.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

Las leyes que exigen revalidación para el ejercicio de la profesión de médico o abogado, no tienen otra finalidad que conocer el grado de preparación y competencia necesaria para su ejercicio, y tiene por efecto colocar en igualdad de condiciones a los extranjeros con los nacionales; y así como cualquiera, aunque sea argentino, no puede ejercer la profesión de médico o abogado sin tener un diploma expedido por una universidad autorizada para otorgarlo, tampoco un extranjero puede, trayendo un título de una universidad exterior, ejercer su profesión sin revalidar ese título, porque puede no merecernos suficiente confianza.

Nosotros colocamos hoy al extranjero que ejerce la procuración, en la misma condición que al médico o abogado.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar.

**Sr. Melo.** — Pido que se vote por partes, primero el proyecto de la comisión y después el agregado que propongo del anterior artículo 18 exigiendo la ciudadanía.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Eso iba a proponer, señor senador. Se va a votar primero el despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa,

**Sr. Presidente** (Villanueva).—Ahora se va a votar, como agregado, el artículo 18 de la cámara de diputados, según lo propone el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota, y dice el

**Sr. Secretario** (Ocampo). — Está empatada la votación.

**Sr. Esteves.** — No está empatada la votación: son 7 contra 8.

—Entra al recinto el señor senador Albarracín.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Sirvanse ponerse de pie los señores senadores que estén por la afirmativa.

**Sr. Secretario** (Ocampo). — Está empatada, porque ha votado por la afirmativa el señor senador Albarracín.

**Sr. Esteves.** — El señor senador Albarracín ha entrado caminando, y no es que se haya puesto de pie para votar. (*Risas*).

**Sr. Presidente** (Villanueva). — ¿El señor senador Albarracín vota por la afirmativa?

**Sr. Albarracín.** — Por la negativa.

**Sr. Secretario** (Ocampo). — Entonces es negativa.

—Se aprueban sin observación los artículos 19, 20 y 21.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Para pedir a la comisión quiera aclarar la situación en que quedan los procuradores de las provincias donde existe reglamentada la procuración.

Si esas reglamentaciones exigiesen los mismos requisitos que exige esta



ley, o si se exigieran mayores, esos procuradores, con la simple presentación de sus títulos, sin ningún otro requisito, estarían habilitados para ejercer también la procuración ante los tribunales federales.

**Sr. Gallo.** — Pido la palabra.

La situación de los procuradores inscriptos en las provincias, o que tengan diplomas expedidos por las provincias, están regidos por los artículos 13 y 14, que se refieren a los que tienen ya título anterior a esta ley y a los que pueden tenerlo con posterioridad.

La comisión, por lo demás, entiende que los requisitos establecidos por el artículo 3.º tienen que ser cumplidos en todas sus partes; es decir, que hay que hacer efectiva la fianza y los depósitos, aun cuando el procurador haya otorgado la fianza exigida para el ejercicio de su profesión ante los tribunales provinciales, porque se trata de dos jurisdicciones distintas; de otra manera se producirían conflictos y dificultades.

**Sr. Llanos.** — Pido la palabra.

Esos conflictos existirán igualmente en ese caso en la capital de la república, donde hay también la doble jurisdicción, la federal y la ordinaria. Yo me quiero poner en ese caso: En Santiago del Estero, por ejemplo, los procuradores reúnen todas las condiciones exigidas por esta ley y tienen otorgada una fianza de tres mil pesos, y pienso que a esos procuradores, para poder ejercer la procuración ante la justicia nacional, les bastará acreditar que están inscriptos en las matrículas de las provincias y entonces los jueces federales deben inscribirlos en las matrículas.

**Sr. Gallo.** — Por mi parte no lo entiendo así. Creo que deben llenarse todos los requisitos exigidos por la ley que en diversos artículos contempla las distintas situaciones.

**Sr. Llanos.** — De tal manera que deben otorgar nueva fianza.

**Sr. Gallo.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — ¿El

señor senador propone alguna modificación?

**Sr. Llanos.** — Yo propongo un artículo que diga lo siguiente: “Que los procuradores de las provincias, donde estuviese reglamentada la profesión y que la ley respectiva exigiese los mismos requisitos que la presente ley, deberán estar habilitados para ejercer la profesión en los juzgados federales respectivos, con la simple presentación del título para que sea inscripto”.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — El honorable senado resolverá si se toma en consideración inmediatamente o si este artículo se pasa a estudio de la comisión, como lo dispone el reglamento.

**Sr. Llanos.** — Me parece, señor presidente, que es un asunto sencillo que podríamos tratarlo inmediatamente, a fin de que no se demore la sanción de esta ley.

—Apoyado.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Se va a votar, si se toma en consideración inmediatamente el artículo propuesto por el señor senador por Santiago del Estero.

—Se vota, y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Villanueva).** — Está en discusión.

**Sr. Gallo.** — Repito, señor presidente, que la situación de los procuradores de provincias que ejercen su profesión y que están inscriptos en la matrícula respectiva, está contemplado por los artículos 13 y 14 y este nuevo artículo vendría a ser contradictorio con los que ya se han sancionado.

**Sr. Llanos.** — Yo no veo ninguna contradicción, sino una ampliación a esos artículos, autorizándolos a ejercer la profesión, como ocurre en la capital federal, donde hay la justicia ordinaria y la jurisdicción federal, sin tribunales distintos; y, si aquí para ejercer las dos ramas de la administración, no se exige sino una fianza, exigir en las provincias una doble



fianza, me parece un exceso; bastaría con una, la que tienen otorgada.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — La había pedido con anterioridad el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Roca.** — No había oído; le pido disculpas al señor senador.

**Sr. Melo.** — Absolutamente, señor senador.

Era para observar, con relación a la indicación del señor senador por Santiago del Estero, que esta ley está destinada a regir en los tribunales federales en los de la capital, en los juzgados de los territorios y en los federales de sección de las provincias, que si nosotros agregamos a esta ley disposiciones que se refieran a los procuradores que ejercen funciones en los tribunales provinciales, invadiríamos jurisdicciones provinciales.

**Sr. Llanos.** — No, señor senador.

**Sr. Melo.** — Si agregamos la disposición, podría ocurrir lo siguiente: Mañana en una provincia se reglamenta la profesión y en lugar de establecer una fianza de 5.000 se pone 500; entonces allí los procuradores con un certificado de haber cumplido con los requisitos de la ley provincial, se presentarían ante la justicia nacional a pedir que se les incorporara y que se les tuviera como procuradores en una situación de desigualdad con los otros y burlando la ley nacional.

Repito que todo lo que se refiere al ejercicio de la procuración en las provincias, no puede ser objeto de una reglamentación en esta ley, porque invadiría atribuciones y saldríamos de la órbita marcada al congreso por la constitución, que sólo nos autoriza a reglamentar lo que se refiere a la capital de la república y a los territorios nacionales y a la justicia federal y no a la justicia de provincias, cuya exclusiva organización a ellas les corresponde por una cláusula expresa de la constitución.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

Yo creo que las observaciones formuladas por el señor senador por San-

tiago del Estero, tienen su razón de ser, si bien no estoy conforme con el texto del artículo en que propone el remedio para el caso que él plantea.

La proposición del señor senador tiene el inconveniente de que la fianza sólo se puede hacer efectiva a favor de aquel a quien se otorga; ¿qué garantía habrá para la justicia federal con la fianza otorgada ante la justicia provincial, en los casos de faltas cometidas en la primera jurisdicción? Sería necesario establecer que la fianza otorgada en las provincias fuera otorgada a la orden de los presidentes de las cámaras de apelaciones en lo federal, y a la orden conjunta de los funcionarios determinados en las leyes provinciales. En esa forma serviría para ambas jurisdicciones, nacional y provincial.

**Sr. Gallo.** — Una proposición semejante a la que acaba de formular el señor senador por Santiago del Estero, fué formulada en la cámara de diputados al discutirse este proyecto, y fué allí desestimada por razón de las dificultades a que acaba de hacer referencia el señor senador por Córdoba. ¿Cómo se haría efectiva esta garantía ante los tribunales de distinta jurisdicción? ¿Cómo se conocería si ha llegado el momento de hacer efectiva la reintegración del depósito de la garantía cuando la aplicación de la pena se ha hecho por tribunales de distinta jurisdicción? Es precisamente teniendo en cuenta las dificultades que podrían resultar en la práctica por la exigencia de una doble garantía, que además de obrar razones, la comisión ha tenido esa al aconsejar a la cámara que se autoricen estos tres procedimientos de dar la garantía: depósito en efectivo, en títulos, en hipoteca o fianza personal, de tal manera, que el procurador pueda cumplir con las exigencias de la ley sin mayores inconvenientes. Por otra parte, teniendo en cuenta las dificultades que la exigencia de la garantía puede presentar para los procuradores en los tribunales federales en las provincias y territorios nacionales, se



ha reducido el importe a dos mil pesos, siendo en la capital federal de cinco mil pesos.

**Sr. Llanos.** — El hecho de que la fianza esté otorgada a favor del presidente de la suprema corte, no quiere decir que no puedan hacerse efectivas por órdenes emanadas de estos jueces, porque tales fianzas son dadas para responder en el ejercicio de la procuración por los fallos de los que se dedican a ella.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar como agregado, el artículo propuesto por el señor senador por Santiago.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Linares.**—¿Qué dice el artículo?

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a leer.

**Sr. Secretario** (Ocampo). — (Leyendo). — “Los procuradores de las provincias donde estuviera reglamentada la procuración y los reglamentos exigieran los mismos requisitos que exige la presente ley”.

**Sr. Llanos.** — Yo puedo explicarle en qué consiste mi pensamiento y es este: que los procuradores que tengan ya otorgada fianza, puedan ser inscriptos en otra matrícula sin exigirles nueva fianza.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Se va a votar el artículo propuesto por el señor senador por Santiago.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Villanueva).—Queda sancionada la ley.

**Sr. Zabala.** — Pido la palabra.

En la orden del día número 17 viene un despacho de la comisión de agricultura sobre una solicitud del señor Menéndez Beheti, referente a la concesión para establecer un frigorífico en el territorio de Santa Cruz.

Hago esta indicación en el sentido de que se ponga a consideración del honorable senado.

**Sr. Roca.** — Pido la palabra.

Yo entiendo que después de ese asunto, que no sé si será asunto que se puede tratar con brevedad, debe pasarse a sesión secreta, para lo que están citados los señores ministros.

**Sr. Presidente** (Villanueva). — Los ministros están en antesalas.

**Sr. Roca.** — Han sido citados para las seis de la tarde.

**Sr. Presidente** (Villanueva).—Queda levantada la sesión.

—Eran las 6 y 30 p. m.

PEDRO VARANGOT.

*Director de taquigrafos.*